

Politika

Josu Erkoreka

PORTAVOZ DEL GOBIERNO VASCO Y CONSEJERO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA

“Vamos a ver si el acercamiento de EH Bildu al Gobierno es mero postureo”

El portavoz del Ejecutivo de Iñigo Urkullu acoge la disposición de la izquierda abertzale a negociar las Cuentas, pero le insta a bajar a las propuestas concretas

Miriam Vázquez

BILBAO — Josu Erkoreka repasa una actualidad marcada por el proceso catalán, pero también por el repentino viraje de EH Bildu, rival natural del PNV en las urnas. Ha pasado de rechazar los dos proyectos presupuestarios presentados por Lakua en la presente legislatura, a ofrecerse a negociar. ¿Le sorprende?

—En la izquierda abertzale se están produciendo cambios copernicanos. Cuando concurrí por primera vez a las elecciones generales, no se presentaron porque eran unas elecciones españolas y un abertzale no podía participar por principio en ellas. Solo era admisible iniciar un proceso constituyente en los siete herrialdes. Ahora ocupan escaños en el Congreso sin ningún escrúpulo moral, y han dicho en el Parlamento Vasco que es necesario establecer estrategias diferenciadas según estemos en la CAV, Navarra o Iparralde. Hace un año se autoexcluyeron de todo lo que tuviera ver con la aprobación de los Presupuestos, y ahora parece que se presentan con una actitud diferente. Vamos a ver si no es un mero postureo, una estrategia encaminada a aparentar que han hecho un esfuerzo de aproximarse al Gobierno.

¿Las condiciones que está planteando EH Bildu le parecen asumibles?

—No es suficiente decir que están dispuestos a lograr un acuerdo siempre y cuando no haya recortes. Lo que no sería de recibo y pondría de manifiesto que su voluntad no era real sería que pretendieran que nos saltáramos todas las normas que vienen desde Europa y condicionan los Presupuestos: los límites de deuda, el déficit... Como cualquier gobierno que pudiera estar en nuestro lugar, tenemos que respetarlo, y la izquierda abertzale donde gobierna lo está haciendo. Si aceptamos el marco normativo que nos condiciona, a partir de ahí hay que centrarse en debatir cuáles son las prioridades. El Gobierno vasco tiene claro que la prioridad pasa por la reactivación, el empleo y consolidar los servicios públicos esenciales. Vamos a ver cuáles son las de EH Bildu.



Josu Erkoreka posa ante la cristalería de las oficinas del Gobierno vasco en la plaza Bizkaia bilbaina. Fotos: Pablo Viñas

¿Qué ha pasado en la izquierda abertzale?

—Ahora tienen importantes responsabilidades de gobierno y parece que tienen intención de normalizar su presencia institucional y ofrecer una gestión positiva a la ciudadanía. Esto no se puede hacer defendiendo todos los días la ruptura, el discurso antisistema. Están debatiéndose entre las inercias históricas que les sitúan fuera del sistema, y la gestión de lo que hay. Aun así, ¿el PSE sigue siendo el socio preferente en las Cuentas?

—Con el PSE venimos de un acuerdo con compromisos no solo para 2014, sino que se proyectaban incluso para 2015 o 2016. Es lógico que la primera referencia sea el PSE. El Gobierno es partidario de continuar en esa línea y de reafirmar este acuerdo.

El lehendakari ha apostado por profundizar en los acuerdos con el PSE. Supongo que, a estas alturas de la legislatura, cabe descartar un gobierno de coalición...

—La coalición la descartó el propio PSE hace un año, cuando se produjeron las conversaciones del Presupuesto de 2014. Hubo quien desde la opinión pública quiso saber si la volun-

dad del PSE iba más allá del Presupuesto, y fueron claros diciendo que no lo vinculaban a una coalición. No creo que en el ecuador de la legislatura se lo planteen. Es una hipótesis que probablemente descarta todo el mundo y, salvo que se ponga sobre la mesa de forma explícita, que no creo, mejor no operar con esa hipótesis y operar con acuerdos presupuestarios.

¿El Gobierno apuesta por acuerdos a tres con el PSE y la izquierda abertzale en los Presupuestos?

—El año pasado el acuerdo se produjo con el PSE, el único que se prestó. A ese acuerdo se sumó el PP. La izquierda abertzale se excluyó desde

el principio. El Gobierno ofrece una propuesta de reactivación, y mantenimiento de la red de servicios públicos y la plantilla estructural de empleados públicos. En una apuesta así pueden coincidir prácticamente todas las fuerzas. Tampoco creo que el PP encontrara motivos de discrepancia serios. El año pasado se sumó. Pero el PP ha afilado sus críticas contra el PNV y el Gobierno vasco...

—Es verdad que a lo largo del verano ha formulado un discurso innecesariamente agresivo. Pero eso afecta más a las relaciones entre partidos que entre instituciones. Como Gobierno no vamos a excluir a ninguna for-

mación. Un PP que compartió apuestas presupuestarias en 2014 no debería no compartir la propuesta para 2015. Usted acusó a Rajoy de acometer una recentralización sin precedentes, incluso desde el franquismo.

—No estoy identificando las políticas del PP con el franquismo. Sé que el franquismo descansaba sobre un centralismo atroz y que el modelo autonómico difícilmente se puede asimilar con el franquista. Pero puedo decir que algunas medidas no existían ni en la época franquista: una base de datos centralizada que contenga la información relativa a las subvenciones que concedan todas las administraciones públicas, por ejemplo. Las comunidades están quedando reducidas a estamentos administrativos, no políticos, encaminados a ejecutar las políticas diseñadas por los poderes centrales del Estado.

¿Hay contacto con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y los ministros, o se ha enfriado?

—Contactos no deja de haberlos. En lo personal no son malos. Lo que no son es fructíferos, porque los planteamientos que esgrime el Gobierno vasco se encuentran con un frontón.

¿Madrid ha ofrecido a Lakua un acuerdo para salvar las 120 plazas de la OPE de la Ertzaintza, rascando de otras oposiciones que no se han convocado en Osakidetza?

—Eso no es un acuerdo, es claudicar. Lo que propone es renunciar a las singularidades de la Ertzaintza, que entroncan con la Constitución, con un derecho histórico, y que siempre se han conducido por reglas propias en el marco del pacto bilateral de la Junta de Seguridad. No podemos aceptar que pretendan imponer las tasas de reposición de empleados públicos que están previstas para otras administraciones, como si la Ertzaintza fuera la policía municipal de Moratalaz y tuviera que adaptarse a las mismas reglas y no fuera fruto de un derecho histórico. Sería renunciar a un principio irrenunciable.

¿Tiene pinta de que Rajoy dejará el Cupo para la próxima legislatura?

—Cuando se deja en manos de los funcionarios de la Hacienda del Estado, se pone en marcha el engranaje burocrático recentralizante y siempre barren para casa. O hay impulso político, o se dilatará en el tiempo.

Visto lo visto, ¿no es muy optimista pensar que Rajoy vaya a pactar un nuevo estatus para Euskadi?

—Es cierto que su actitud ahora no es la más proclive, pero no estamos en esa fase. El reto del autogobierno debe pasar primero por el Parlamento Vasco. Especular ahora sobre la actitud de Rajoy es precipitarse.

¿Le preocupa que el rechazo a la consulta pueda generar frustración en los catalanes, o incluso tumultos, como insinuaba la Generalitat?

—Lo primero que preocupa es la cerrazón. No se ha querido aceptar el componente político de la reivindicación. Se ha pretendido plantear todo en clave burocrática, en términos jurídicos. Cuando se encomienda todo a la Abogacía, se pone en evidencia una incapacidad o una falta de voluntad para afrontar con herra-

mientas políticas una reivindicación política.

¿La reforma constitucional del PSOE puede servir para Euskadi?

—Es de consumo interno para calmar las aguas del PSOE. Como oferta para satisfacer a Catalunya o Euskadi no sirve. No acabo de ver qué aporta a comunidades que nunca han planteado una cuestión conflictiva, como Murcia o Madrid; y tampoco a comunidades con planeamientos ambiciosos, como Catalunya o Euskadi.

¿El programa Hitzeman servirá para que Rajoy pueda reconsiderar la política penitenciaria?

—El programa no quiere engañar a nadie, se explicitan qué objetivos dependen del Gobierno vasco y cuáles no. A partir de ahí, no puedo dejar de expresar mi sorpresa porque el Gobierno central haya descalificado Hitzeman diciendo que el Gobierno vasco no tiene competencias en el ámbito penitenciario. Hay dos preceptos del Estatuto de Gernika: el artículo 10 apartado 14, y artículo 12 apartado 1. Competencias las tiene, que no se hayan materializado las transferencias es un hecho irregular del que solo es responsable el Gobierno central. Además, hay ámbitos en los que el

“Un Gobierno de coalición con el PSE es una hipótesis que prácticamente descarta todo el mundo en el ecuador de la legislatura”

“La reforma constitucional es una propuesta de consumo interno del PSOE, no sirve para satisfacer a Catalunya o Euskadi”

Gobierno vasco ya viene actuando y puede seguir. Pero pedimos que el Gobierno central cumpla la ley, y no siga abrazando la insumisión al Estatuto, porque casi podría decirse que es insumiso, se aparta de la ley y de forma consciente no la cumple.

¿El grupo disidente con la línea de Sortu, que ha quemado autobuses, tiene cuerpo suficiente para suponer en una escisión?

—Voces más autorizadas que la mía han dicho que no ven ese peligro. La izquierda abertzale tendría que hacer un esfuerzo para contener esas iras. EH Bildu apuesta por reformular el ‘suelo ético’ de la Ponencia de Paz. ¿Ve disposición a avanzar en el reconocimiento del daño causado?

—Llama la atención que, tres años después del cese de ETA, sea imposible compartir un suelo ético. Hará falta el concurso de las fuerzas políticas y, particularmente, de la izquierda abertzale, que tiene el reto del reconocimiento del daño causado.

¿Le parecería razonable incluir las torturas, como pide EH Bildu?

—No veo que el suelo ético deje resquicio alguno del que pueda inferirse que alguien acepta las torturas. Ese suelo es incompatible con las torturas. No veo necesario explicitar una por una las vulneraciones que se han dado. ●

“Reducir sueldo y jornada a los funcionarios es un supuesto muy excepcional en la nueva ley”

M. Vázquez

BILBAO — La consejería de Administración Pública afronta un otoño cargado de retos, entre los que se sitúan la aprobación de la Ley Municipal, y también apaciguar las protestas de los funcionarios.

¿La Ley Municipal tiene apoyos suficientes para ser aprobada?

—El Gobierno ha recabado aportaciones de Eudel y de las diputaciones, y yo he mantenido encuentros con los grupos parlamentarios. Es una ley que da al municipio vasco mayor autonomía que la reconocida a las administraciones locales del Estado, y que en principio podría concitar adhesiones importantes en el Parlamento. No hallé discrepancias radicales.

¿La Diputación de Araba va a recurrirla ante la Comisión Arbitral?

—He tenido conversaciones con Javier de Andrés y le he transmitido que su postura no creo que vaya a tener acogida en la Comisión Arbitral tal y como está compuesta ahora, porque ha tenido ocasión de pronunciarse sobre estos asuntos al final de la pasada legislatura, y fijó una doctrina que no parece acorde con lo que él está defendiendo. Creo que finalmente no recurrirá. Espero que no lo haga porque retrasaría una ley necesaria.

Los funcionarios verán congelado su salario en 2015. ¿No había ninguna manera de evitar aplicar las directrices de Rajoy en la CAV?

—Cualquier pretensión de apartarse de una norma básica del Estado clara e inequívoca nos hubiese abocado a un recurso ante el Tribunal Constitucional y a una suspensión. Ocurrió con la supresión de la paga extra de 2012. El Gobierno [de Patxi López] prometió que iba a hacer efectiva la paga, y luego se encontraron con un mandato del TC suspendiendo la orden de pago. Frustración para 70.000 empleados públicos. Operando en el marco de la inseguridad jurídica, el mayor perjudicado es el empleado público. Queremos mostrar nuestra mejor disposición con ellos, y lo hicimos adelantando la paga de junio a enero.

La consejera de Seguridad ha lamentado las protestas de la Ertzaintza, y el lehendakari ha tenido un roce con algún sindicalista de Osakidetza. ¿Teme que traslade una imagen de enfrentamiento?

—No pasan de meras anécdotas. No cambia la imagen del lehendakari, con un compromiso social de primer orden. En el Gobierno hay muchos que somos empleados públicos. Cuando mi periplo por la



El consejero, durante la entrevista.

“He hablado con el diputado general de Araba, y creo que finalmente no va a recurrir la Ley Municipal ante la Comisión Arbitral”

“Situarme en las quinielas a la Alcaldía de Bilbao fue cosa de la prensa, yo estaba en lo que estaba y no me planteaba otra posibilidad”

política concluya, volveré a mi puesto de funcionario. Comprendemos sus inquietudes, pero no por ser funcionarios vamos a convertir el Gobierno en un instrumento al servicio de las pretensiones más desahoradas de los líderes sindicales.

Pero, ¿la Ley de Empleo Público abre la puerta a rebajar salarios y jornadas?

—Es un borrador que se está negociando, y lo que hace es establecer una posibilidad para una administración que se encuentre en una situación financiera insostenible, que podría ajustar el régimen de sus empleados reduciendo sueldo y horario. Es un supuesto muy excepcional. En otros lugares ha habido despidos.

Usted estuvo en las quinielas como candidato a la Alcaldía de Bilbao...

—Son cosas de la prensa.

Es decir, no estuvo en las quinielas por voluntad propia...
—No tenía más preocupación que continuar en el Gobierno. Yo estaba en lo que estaba y no me planteaba ninguna otra posibilidad. ●